



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE NRO: 8563/2024

AUTOS: “SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA c/ AFIP-DIRECCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación deducido en sede administrativa el 18/3/2024 contra la Resolución. RESOL 2023 -11074-E-AFIP que desestima el recurso de revisión contra la resolución que impuso una multa al quejoso, en virtud de lo dispuesto por el art. 8º de la Resolución General Nro. 1566 t.o 2010.

Que notificada de ello, se hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 39 bis inc. b) del Decreto Ley 1285/58, conf. Art. 26 de la ley 24.463

Que en el mes de abril de 2024, el organismo de recaudación ordenó la remisión de los presentes obrados informando el incumplimiento del requisito de previo pago de la multa impuesta, en los términos del art. 15 de la ley 18.820.

Que la aquí accionante, en su escrito recursivo, plantea la imposibilidad de afrontar el depósito previo al tiempo que deduce la inconstitucionalidad de la exigencia del “solve et repete”.

Que así las cosas en relación al planteo introducido, el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, ello no importa una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), pues existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 consid. 10).

En el mismo orden, si bien el Alto Tribunal admitió la plena operatividad de las previsiones del art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma sustancialmente análoga al art. 18 de la C.N. señaló que, pese a ello, aquellas no desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 - del entonces vigente - art. 12 de la ley 21.864 en cuanto establecía la obligación de depositar los aportes omitidos, su – actualización monetaria, recargos e intereses para acceder a la instancia judicial, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante desproporcionado con su concreta capacidad económica. Similar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal, en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar el art. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 240; 296:40 57; 307:1753).



Que en consecuencia en tanto en el sub examine surgen, observados con criterio amplio, elementos suficientes que dan cuenta de la imposibilidad de ingresar el depósito previo, habrá de admitirse la apertura de esta instancia.

Que en orden a la crítica vertida contra la sanción impuesta se alza en primer término por la negativa de la administración a considerar los elementos subjetivos que determinaron la imposibilidad de ingresar los pagos en la oportunidad prevista. Sostiene que la mora incurrida en el pago responde al desfase económico financiero generado por el propio Estado. Arguye que la inclusión y aceptación de sucesivos planes de pagos da cuenta de la situación económico financiera de la cooperativa, al tiempo que demuestran su constante voluntad de pago y colisiona, en consecuencia, con la imposición de una multa en su contra.

Ha de señalarse, con carácter liminar, que en el caso de multas derivadas del incumplimiento de las obligaciones para con los sistemas de seguridad social, la sola constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor. El elemento subjetivo no tiene relevancia, dado que la sanción tiene por finalidad la falta objetivamente considerada y no la intencionalidad de la parte.

La RG 1566, no es una norma penal, sino que se trata de una disposición que se limita a fijar el monto de la sanción -entre un máximo y un mínimo- establecida por la Ley N° 17.250, a los efectos de evitar arbitrariedades por parte de los funcionarios en la aplicación de la misma y tiene por finalidad castigar el ingreso tardío de los aportes necesarios para el financiamiento del sistema.

Dicha norma establece que una vez verificada la infracción, se aplica una multa cuyo porcentaje sobre el total omitido se gradúa en relación al tiempo transcurrido desde el vencimiento de la obligación y el efectivo ingreso del monto adeudado, sin atribuir relevancia a las circunstancias de hecho de índole subjetiva para eximir o atenuar la multa correspondiente (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.07.07 -y aclaratoria del 17.05.07-, "Urbani, Ricardo Luis"). Es decir, comprobada objetivamente la comisión de una falta, carece de entidad la consideración del aspecto subjetivo, en tanto en las contravenciones o infracciones fundadas en el Poder de Policía del Estado y las relacionadas con la Seguridad Social no se requiere "culpa" o "dolo" en el infractor, criterio éste que deviene de la literalidad de la norma (ley 17.250). (Cfr. Sala I en autos "Industrias Montecarlo S.A. c/ A.F.I.P-D.G.I s/ Impugnación de deuda", sentencia definitiva 122542, del 18/10/07).

El apelante plantea asimismo la nulidad de las actas determinativas de la sanción por carecer de los requisitos esenciales del acto administrativo. Sobre el particular ha de recordarse que las diligencias que se cumplen con la intervención de los funcionarios competentes y se instrumentan a través de las actas de verificación que se notifican al interpelado, no reúnen los requisitos esenciales ni generales de un acto administrativo, y ello por cuanto no ha mediado una decisión fundada que cause estado, pues hasta tanto no se haya agotado el procedimiento regulado por la ley 18.820 y que da lugar a la ejecución, no es un acto administrativo definitivo, contando el obligado con los medios legales apropiados para demostrar la improcedencia del débito intimado (cfr. Juan Gilibert, "El derecho a la legítima defensa en el sistema jubilatorio argentino"), conf. Expediente 12957/95, in re "JUAN BRACHO GARCÍA E HIJOS S.A.C.I.A. c/ D.G.I.". C.F.S.S., Sala I, sent. 84016.

En cuanto a las posibles causales exculpatorias validas, tampoco es relevante la existencia de dificultades económico-financieras, derivadas de circunstancias atinentes al desarrollo del giro empresario o de la actividad desarrollada por la empresa.

Si bien podría, no se descartarse que la situación económica de la empresa pudo haber incidido en el efectivo cumplimiento de estas obligaciones, ello por sí sólo no es causal exculpatoria suficiente, si no se demuestra también el simultáneo agotamiento de las gestiones para obtener, en debida fecha, la asistencia financiera que le permita afrontar las obligaciones previsionales.

En efecto, de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, surge acogimiento a Planes de Facilidades de Pago y el detalle de regularización de los siguientes PFP: N669223, N669389, N741618, N741670, N741800, N741484, N756133, N768559, N768559, N768621, N768538, N768437, N768469, N768578, N768596, P857992, P858037,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

P857962, P857978, P858085, P859245, P858799, P858899, P859091, P858979, P859174 y P877594; que en su gran mayoría fueron cancelados, asimismo se advierte la constante falta de pago de las cuotas correspondientes a los mismos.

Por otra parte, en línea con lo expuesto y mas allá de la cancelación aludida, carece de sustento la eximición de la sanción por acogimiento a antiguos planes de pagos puesto que al tiempo de presentación del remedio bajo análisis se encontraba vigente marco legal para tal pretensión, por lo tanto, para que opere la dispensa debió haber sido incluida en un régimen de condonación de deudas reglado por la ley 27.743.

Finalmente, la recurrente plantea de inconstitucionalidad del art. 8 de la RG 1566 AFIP, y 15 de la ley 17.250 en cuanto en su estimación se incurre en exceso de punición que colisiona con el principio de razonabilidad.

La garantía de la defensa en juicio está sujeta a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que solo pueden ser constitucionalmente impugnadas cuando resulten irrazonables, o sea cuando los medios que arbitren no se adecuen a los fines cuya realización procuren o cuando consagren una manifiesta iniquidad (C.S. diciembre 3-1991 Del Val, Ricardo J.), situación que no se configura en autos.

Atento que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal configura un acto de suma gravedad institucionalidad, “ultima ratio” del orden jurídico, por lo que su planteo debe contener un sólido desarrollo argumental y fuertes fundamentos para que prospere, debiendo demostrarse claramente de qué manera aquella contraría la Constitución Nacional, no bastando las meras citas de las normas trasgredidas y, que la recurrente reconoce expresamente haber realizado una infracción de carácter objetivo,- mora en el depósito de aportes y contribuciones- siendo el fin jurídico sancionar el ingreso tardío de aportes y contribuciones al sistema cuando ha fracasado el efecto disuasorio que entraña la amenaza de sufrir un mal mayor- la pena - a fin de asegurar el cumplimiento eficaz de los mismos (CFSS, Sala II, sentencia 72246 del 28/8/98 en autos: “Diesel Oliden S.A c/ DGI”), por lo que corresponde desestimar dicho planteo.

Por ello lo expuesto el Tribunal **RESUELVE**: 1) Declarar formalmente admisible el recurso interpuesto; 2) Rechazar el mismo y confirmar la resolución recurrida; y 3) Sin costas en la Alzada.

Por disposición del Tribunal, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p. 4 y conc.).

Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VOCALIA 1 SE ENCUENTRA VACANTE (ART. 109 del R.J.N)

